

Conflictos en la coalición golpista:

la destitución del dictador y el *bordaberrianismo* (1974-1976)

Conflicts in the coup alliance: the removal of the dictator and *bordaberrianismo* (1974-1976)

Escrito por **Iván Techera Delgado**

Resumen

El siguiente trabajo parte de la tesis realizada por el autor para la licenciatura en Historia en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Tiene como objetivo comprender los desencuentros entre Juan María Bordaberry y las Fuerzas Armadas dentro de la coalición golpista, en el marco en el que se desarrollaron un conjunto de memorandos pertenecientes al dictador, estableciendo una serie de ideas sobre el devenir de la dictadura. En el imaginario colectivo y en distintos presentes la destitución y los memorandos se redujeron a la premisa sobre la eliminación de los partidos políticos por corrientes de opinión. El cruce de dicho planteamiento con la experiencia histórica de los memorandos demuestra que el tema de los partidos fue un elemento secundario en base a otros que llevaron al desencuentro entre los uniformados y el mandatario. Se espera encontrar respuestas a esto y también explicitar las bases del pensamiento *bordaberriano*.

Palabras clave: Bordaberry – Militares – Destitución – *Bordaberrianismo*

Abstract

This is part of my work as part of studies for a B. A. in History in The School of Humanities and Sciences of Education. It focuses on the disagreements between Juan María Bordaberry and the Armed Forces in the coup alliance. In this context, a number of memoranda by the dictator, whereby a series of ideas on the development of the dictatorship are expressed. In the collective imagination the removal and memoranda were reduced to a premise on the elimination of political parties according to orientation of opinion. The exchange of this premise with the historical experience of the memoranda shows that the aspect of the parties was a secondary element based on others which led to the disagreement between both parties. It is expected that a series of answers to explain the foundations of Bardaberry's thinking can be found.

Keywords: Bordaberry – military men – removal – *bordaberrianism*

Introducción

Desde que se produjo el proceso que dio forma al golpe de Estado de 1973, las Fuerzas Armadas entendieron que era necesario consolidar alianzas con elementos afines para repensar la contaminada democracia. En la reunión del 12 de febrero de 1973 los altos mandos militares y el entonces presidente Juan María Bordaberry anunciaron un cambio institucional con la creación del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), naciendo así la primera gran alianza dentro de la coalición golpista, entre el novel dictador y las FF. AA. La experiencia de aquel ajetreado verano no vaticinó lo que

sucedería en el final del otoño de 1976. Las nupcias golpistas conocieron, entre 1974 y el 12 de junio de 1976, serios problemas que desencadenaron en la destitución de Bordaberry como rostro visible del régimen. Las explicaciones sobre esta ruptura han variado a lo largo del tiempo y de los emisores consultados. La memoria de los contemporáneos en presentes cercanos al nuestro ha transformado la destitución en una caricatura sobre el dictador y los motivos, al punto de reducirla a la enunciación sobre los partidos políticos establecida por Bordaberry y entonar un inexistente flashback democrático de la fuerza castrense por la acción tomada. Por estos motivos nos proponemos explicitar las razones del quiebre vincular en la alianza, mostrar los desencuentros, a la vez que establecemos las premisas del modelo propuesto por el dictador para contemplar el futuro del régimen. Para esto decidimos analizar las reacciones de los diversos elementos que participaron en la primera etapa de la Dictadura, es decir, de los ya mencionados uniformados (con sus distintas facciones) junto con Bordaberry (y sus círculos) y de los elementos que no fueron perseguidos por el régimen.

El análisis del transcurso de 1974, con los evidentes primeros desencuentros en la pugna por el ejercicio de poder; el año de 1975, con los festejos por el Año de la Orientalidad, en que aparece el mandatario en distintos lugares del país, dando notas en la prensa extranjera y presentando los primeros memorandos; y el primer semestre de 1976, con unas FF. AA. conscientes del problema que significaba Bordaberry, explican las fluctuantes relaciones hasta la decisión final de destituir al dictador e iniciar el «período transitorio», es decir, el predominio militar en el Gobierno. En ese ínterin el crecimiento de la popularidad de Bordaberry llevó a que este propusiera un sistema que denominó «democracia cristiana».1 En el presente trabajo analizaremos los puntos centrales que fueron manejados en distintos discursos, entrevistas y memorandos para comprender sus influencias y el peso que tuvieron para concretar el desencuentro final de la alianza; como también las respuestas, los argumentos esgrimidos y las acciones de la coalición golpista al modelo *bordaberriano*.

«¿Cómo explicar estos desencuentros [de las alianzas que configuraron la Dictadura] entre acumulaciones analíticas que parecerían convergentes?» se preguntan Vania Markarian y Aldo Marchesi (2022: 394). Vaticinar respuestas cortas resulta imposible. La gestación de la «escalada autoritaria» ya de por sí plantea problemas temporales para entender las nociones filosóficas del heterogéneo campo conservador y reaccionario del espectro de las derechas; delimitar sus acciones, buscando un mecanismo que por momentos resulta cuantitativo, presentando problemas de tipo historicistas. Todo lo sucedido en las dos décadas previas al golpe de Estado lleva irremediablemente a este. Pero a la vez es cierto que muchos elementos cualitativos pueden llegar a tener mayor resonancia para entender la gestación de distintas alianzas que buscaron, conspiraron, tendieron puentes con otros grupos nacionales, regionales e internacionales, y finalmente concretaron la instalación del *proceso*.

Los reacomodos en las alianzas dentro de la coalición golpista fueron notorios. 1976, año en que los altos mandos militares «quitan su confianza» a Bordaberry, no demuestra únicamente el quiebre entre el dictador (y su ámbito más cercano) y las FA. AA., por el contrario, la destitución del dictador abre puertas a nuevas alianzas entre distintas facciones castrenses con otros participantes de la coalición golpista (como los elementos tecnócratas y el espectro político a favor de los sucesos transcurridos en 1973), remarcando el predominio militar. Aquellos que fueron reacomodando sus discursos en los años del Terrorismo de Estado y concretamente en la Dictadura, junto a la propia interna militar, resultan casos de estudio sustanciales para construir nuevos relatos sobre el pasado reciente desde una óptica poco estimulada. La idea sobre los sistemas de alianzas que dieron forma al régimen resulta una herramienta interesante para volver a leer y estudiar el tema. Frente a las pugnas entre los elementos partícipes, las acciones y proyectos, en el marco de *lobbys* y acuerdos, los estudios de caso amplían los entendimientos sobre la ecuación del autoritarismo y la dictadura. Las posibilidades de su estudio y entendimiento resultan enriquecedoras; la destitución de Bordaberry (como su propia figura) es paradigmática para construir nuevas narrativas.

Los primeros desencuentros

El año de 1974 es caracterizado por ser el año de la institucionalización de distintos síntomas golpistas surgidos en el lento deterioro de la democracia durante la década de 1960 e inicios de 1970, y de los cruces de experiencias que la coalición golpista tuvo durante todo 1973. Durante febrero la Junta de Comandantes en Jefe (JCJ), el Estado Mayor Conjunto (ESMACO) y el COSENA quedan amparados en la Ley Orgánica Militar como elementos de la «nueva institucionalidad» bajo los lineamientos de la «seguridad para el desarrollo» (Rial, 1986: 23). Los «vencedores» (forma en la que se autopercebieron y percibió una parte del mundo civil a los militares) tenían rienda suelta en el ejercicio del poder; o así lo creían los uniformados. Las primeras tensiones entre Bordaberry y los militares no se harían esperar y solo fueron *in crescendo* durante todo 1975.

Por distintos medios nacionales y extranjeros, el dictador estableció que el curso natural de las elecciones de 1976 estaba supeditado al accionar de la «subversión» y que en «ellas no podrán participar candidatos marxistas ni políticos profesionales» (Martínez, 2007: 36).² Un mes después (en mayo) el régimen debió reacomodar el Consejo de Estado ante la muerte de Martín Echegoyen, quedando a su mando Alberto Demichelli. Como paréntesis, el consejero venía formulando una idea sobre el futuro del «proceso» traducida en su «Reforma Constitucional: democracia participativa, representación del trabajo, del capital y la cultura»³ que no fue conocida hasta la destitución del dictador. Este anteproyecto de ley constitucional, que fue presentado al Consejo de Estado, tuvo como base «una concepción neo-corporativista» (Zubillaga, 1991: 89). Mientras Demichelli asumió las directivas del Consejo de Estado, el ministro de Economía Alejandro Végh Villegas denunciaba «los males del proteccionismo económico» que los militares mantuvieron del modelo anterior, concretamente el funcionamiento de la Comisión de Productividad, Precios e Ingresos (Coprín). Los lineamientos fondomonetaristas de Végh fueron compartidos por el dictador, primando por la liberalización del mercado y el fomento a la iniciativa privada. En palabras de Végh, este tipo de «especímenes de una mecánica dirigista» no contemplaba las necesidades del mundo actual, y para Carlos Manini Ríos su eliminación «tiene el sentido de un nuevo paso en el camino hacia la creación de una economía de mercado [...] superando la parálisis de un dirigismo impuesto machamartillo» (*La Mañana*, 12 de agosto de 1975: 5).⁴

Pero para 1974 las críticas al intervencionismo militar se tradujeron en un cruce entre dos grandes visiones que los uniformados tuvieron sobre la figura de Bordaberry: un peligro controlado o la pantomima de un líder secundado por Jorge Pacheco desde Madrid. Aunque los jefes castrenses (con sus diferencias) entendían que el cruce ideológico no se reducía a la aplicación de dos modelos económicos, las pugnas sobre el ejercicio de poder estuvieron presentes en cada cruce entre las FF. AA. y el mandatario. El ejemplo paradigmático se dio el 18 de mayo en conmemoración de la Batalla de Las Piedras. Bordaberry por «resolución presidencial [destituyó] a Eduardo Peile, Vicepresidente en ejercicio de la presidencia del Instituto Nacional de Carnes (INAC) [...] provocando un profundo malestar en la Junta de Oficiales Generales» (Campodónico, 2003: 126). Peile había sido propuesto por los uniformados y la actuación (y justificación) del mandatario no era suficiente para quitarlo del INAC. La JCJ y el EMASCO solicitaron una reunión con el dictador en Boiso Lanza. El conflicto entre militares y Bordaberry llegó a ser público; la pugna en el ejercicio del gobierno fue cobrando distintas formas. La interrogante sería por qué motivos. Las rispideces, aunque con altibajos, no se ocultaban y, en el mejor de los casos, se matizaban en idas y vueltas presentes en los discursos y presentaciones de los rostros representativos de la Dictadura. Los cruces tuvieron puntos sustanciales que preocupaban a todo el elenco golpista, uno de ellos fue la estructuración de los partidos políticos.

El problema de los partidos

El 4 de septiembre de 1974 el dictador expuso sin tapujos que: «Estamos en el tiempo de la Nación y no de los partidos políticos». Las draconianas palabras del mandatario fueron a más al decir que «No vamos a permitir que este proceso revolucionario sea plebiscitado dentro de este contexto que falseaba la voluntad popular porque sería igual que aceptar como juez al enemigo, que no es el pueblo sino quienes falsamente lo invocan» (*El Día*, 5 de septiembre de 1974: 6). El mensaje fue transmitido por cadena de radio y televisión, la prensa levantó el discurso, las palabras del dictador llegaron a toda la población, se mostraba al mandatario acompañado por los comandantes de las tres armas, parte de su gabinete y la mirada atenta del jefe de la región militar n.º1, Esteban Cristi. El mensaje fue claro y tuvo un receptor definido: los jefes militares. En la «Política de la República», elaborada por la Comisión de Asuntos Políticos de las Fuerzas Armadas (COMASPO), los uniformados no solo mantuvieron su «línea febrerista» en materia económica, sino que la estructuración de los partidos (tema recurrente) tuvo su estudio específico dentro del apartado «Conducción política general» reflejada en los comunicados. El documento, al ser una conjunción de ideas generales que los militares tuvieron desde 1971 hasta su escritura y publicación el 15 de mayo de 1974 (con los acercamientos de facciones castrenses enemistadas), giró en torno a premisas que para ese año eran conocidas. Lo que resulta facilitador, pero a su vez plantea problemas para entender la causalidad que produjo las conflictivas relaciones entre Bordaberry y las FF. AA. Para los altos mandos, la idea de mantener clausuradas las actividades partidarias «hasta que las adecuadas condiciones de normalidad económica, así como social y moral permitían ir derivando la responsabilidad de la acción a partidos políticos fuertes, homogéneos y con personalidades nuevas» (JCJ, 1974: 27) parece haber sido sustancial. El problema aparece en el emisor que defina todas las caracterizaciones necesarias para el retorno.

Una afirmación desde el hoy diría con facilidad que los militares no tenían pensado eliminar a los partidos políticos, y esto resulta un error heredado de los cientistas políticos contemporáneos al régimen y sus estudios sobre la salida democrática, como también a las primeras producciones historiográficas categorizadas en «La política como explicación» (Marchesi, Markarian, 2012: 218) y las tergiversaciones de las memorias. Cada punto mencionado merece un apartado. Todos comparten un elemento común: la respuesta militar al último memorando. Para memorias como la de Julio María Sanguinetti y de algunos uniformados retirados, la destitución se entendió como un gesto partidista de los militares; un *flashback* democrático que se encuentra naturalizado en parte del imaginario colectivo y una construcción no histórica del pasado. El Centro Militar explicó sobre el hecho que «las FF. AA. creían que los partidos políticos no debían alcanzar el P. E. [hasta su depuración racionalizada] por elecciones de inmediato, pero sí acceder a cargos de representantes nacionales o departamentales en el Parlamento». Mientras que el presidente y sus representantes (Walter Ravenna, Adolfo Cardozo Guani y Álvaro Pacheco Seré) «sostenían que los partidos políticos solo existirían y llegarían al poder público como “corrientes de opinión espontáneas”, pero no mediante el voto». Además, agregan que para Bordaberry y sus hombres «los responsables [de la crisis moral, económica y política] eran los partidos y no sus dirigentes» (Centro Militar, 2007: 478 y 479).

A nivel académico, los primeros análisis sobre el tema provienen de la politología (principalmente de los trabajos de Luis Eduardo González, Charles Gillespie y Juan Rial), compartiendo la premisa de que las FF. AA. buscaron encauzar el «estado de excepción» que significaba la dictadura hacia una transición democrática con base en el sistema de partidos. Un doble error metodológico bastante común en la ciencia política es trasladar elementos del pasado a un plano atemporal capaz de aplicarse de forma ideal las herramientas conceptuales escogidas, mientras son contemporáneos a los hechos que describen. Recordemos que entre 1984 y 1987 la idea de la «partidocracia» (herramienta *summum* para los trabajos de la época) en el contexto donde la conceptualización de democracia se reducía únicamente al acto del sufragio (elemento que comenzó a ser

predominante luego del debate por la reforma constitucional de 1980) dio forma a las construcciones sobre el tema.

Y es algo que no se reduce únicamente a dicha ciencia social. En el caso de la historia resulta esclarecedor lo mencionado por José Pedro Barrán en 1985 al decir que desde «que asumieron el gobierno de la Universidad autoridades democráticamente elegidas, el Departamento de Historia del Uruguay, de la Facultad de Humanidades y Ciencias, se propuso centrar su labor de investigación en el siglo XX» (Caetano, Jacob, 1989: 9). El creciente interés por centrar las investigaciones en hechos relativamente cercanos en el tiempo, poco estudiados y que servían como eje para una historia comparativa (tal es el caso del terrismo), o la novedad de apuntar al pasado reciente, con la particularidad de ser los propios historiadores contemporáneos a los fenómenos a investigar, fueron la norma que primó en gran parte de la historiografía nacional.

La propia Dictadura fue un semillero de resistencias a nivel de las nar el de Ana Frega, Carlos Zubillaga, José Rilla, Gerardo Caetano, Yvette Trochón, Jaime Yaffé, entre otros. Las construcciones del pasado reciente y las nuevas miradas en torno a la historia nacional pertenecen a uno de los tres polos que explican Aldo Marchessi y Vaina Markarian (2012). Los relatos sobre el pasado son categorizados en tres polos epistémicos, agrupados por el marco temporal y sus influencias conceptuales, teniendo a la Dictadura y la transición como separadores. En el primero, anterior al golpe y en los primeros años del régimen, encontramos a los influenciados por el estructuralismo como forma explicativa de la crisis económica de 1965 y el golpe. Ramificado en dos vertientes: la influenciada por la Cepal y la línea de la ortodoxia marxista americanista.

Pasado el plebiscito del 80, las primeras aperturas hacia 1985 y el inicio de la transición hasta la pospolítica (Demasi, Rico, 2004), quedaron marcadas las investigaciones influenciadas por la politología con énfasis en el trabajo interdisciplinar, donde el primer entendimiento sobre la destitución de Bordaberry es tratada. La defensa de las instituciones y de los partidos como garantes de la democracia fue la norma. Quienes escribieron desde ese presente (1984-1987) lo hicieron temiendo el riesgo latente de que la transición retrocediera o que los militares volvieran al Gobierno. De ahí la popularidad conceptual de la «partidocracia». La conformación de las narrativas de época son *per se* parte del presente en el que se realizaron. El gran parteaguas fue la obra de Gerardo Caetano, José Rilla y Romeo Pérez, «La partidocracia uruguaya. Historia y teoría de la centralidad de los partidos políticos» (publicada en 1987 en la colección de los *Cuadernos del Claeh*). Esta ponía sobre la mesa la importancia de los partidos durante todos los procesos y fenómenos que atañen a la historia nacional. Para Carlos Demasi, la «partidocracia» se volvió la «principal característica del sistema político uruguayo» (Demasi, 2012: 268). Con antecedentes en «El sistema de partidos: raíces y permanencias», los autores vienen a remarcar la importancia del espectro político partidario en el funcionamiento democrático de las instituciones, el rol protagónico de los políticos y el sistema de partidos como garantes de la vida democrática, generando un determinismo dentro del espectro político partidario.

Pero la visión de 1976 distaba mucho del sentido partidario de las Fuerzas Armadas y de la «salida democrática» en el entendimiento del politólogo Juan Rial (1984). El cuerpo castrense se encontraba dividido. Un número importante de uniformados rechazaba la política partidaria y el parlamentarismo, considerándolos «profesionales de la política» (*La Mañana*, 17 de agosto de 1977), algo que no resultaba novedoso en el Ejército uruguayo durante gran parte del siglo XX. El rechazo a los políticos fue un elemento aglutinante durante la década de 1970 y funcionó como un acercamiento positivo a parte de la ciudadanía uruguaya que desde inicio de 1960 rechazaba ciertas prácticas beneficiosas entre políticos. Siendo el 9 de febrero el ejemplo de lo que militares como Eduardo Zubía concibieron como «la rebeldía de las FF. AA. contra el poder político» (*La Mañana*, 16 de mayo de 1977). Si militares como Cristi y Zubía rechazaban al propio sistema, otros como Gregorio Álvarez y su círculo (muchos con ambiciones políticas) buscaron promover una limpieza del sistema partidario, pero mantenerlo en esencia,

compartiendo el rechazo por los «ilícitos económicos» cometidos por algunos políticos y empresarios.

Estos análisis tienden a no poner el énfasis en el quiebre de la alianza golpista, quedando como una mención utilizada para temporalizar la Dictadura en la ya caduca división tripartita de González. Sea por falta de documentación, cercanía con el tema o dominio de la politología, los estudios no indagaron en la destitución ni en las concepciones de las FF. AA. con los partidos. Si retomamos la situación previa al primer memorando a mediados de 1975, la reestructuración partidaria por parte de los uniformados mantendría el cascarón institucional como forma de legitimar al régimen. La fragmentación ideológica dentro del cuerpo castrense llevó a entender de distintas formas el rol de los partidos y los políticos, y en algunos casos a cuestionar su existencia, lo que se ve reflejado en las múltiples lecturas a la «Política de la República» dependiendo de la facción castrense. Al fin de cuentas, para los uniformados los políticos fueron actores clave en la crisis que sufrió el país, en lo que Carlos Real de Azúa ha denominado como la «determinación endógena» (1971), y la desconfianza en varios coroneles y jefes militares estaba presente desde la década de 1960 y solo se fue acrecentando durante la «escalada autoritaria»

La desconfianza de los uniformados hacia los políticos era un tema que atravesaba las distinciones ideológicas. «Varios de los generales más populares incluido el ambicioso Esteban Cristi, han criticado abiertamente a las élites civiles y políticas. Un número de oficiales subalternos parecen ansiosos por apoyar a cualquier general que actúe con fuerza para enjuiciar a los delincuentes económicos», menciona la Central de Inteligencia a fines de 1972 (CIA, 27 de octubre de 1972).⁵ Opuesto al general Cristi, el coronel Ramón Trabal entendía que los políticos (no así los partidos) eran los culpables de la crisis y que las FF. AA. estaban reducidas a ser «defensores de un orden burgués que se paga el lujo de tener tranquila la conciencia obligándonos a defender sus privilegios» (Tróccoli, 1996: 83). Similar a Trabal, Gregorio Álvarez compartía la idea de que los culpables de la crisis fueron «los hombres y no los partidos». Las distintas corrientes militares y personalidades del cuerpo tuvieron un elemento común que funcionó como el gran legitimante para la intervención castrense en la conducción del Gobierno: los ilícitos económicos. Justificación que tuvo un gran peso en la retórica castrense durante los primeros años de la Dictadura y en el rol del Estado. El tema de los partidos y su relación con el devenir del «proceso» marcó las relaciones del dictador con los altos mandos. Bordaberry antes de dar a conocer sus dos primeros memorandos (siendo el segundo donde explicita la necesidad de eliminar los partidos políticos) fue mostrando su pensamiento sobre el tema en distintos discursos y notas de prensa. 1975 fue el año en el que los indicios de malestar dentro de la alianza fueron explícitos.

La quimera bordaberriana

1975 es un año particular para las relaciones entre Bordaberry y el resto de los partícipes del «proceso». Es año de festividades para el régimen. Bajo el rótulo de Conmemoración del Sesquicentenario de los Hechos Históricos de 1825, condensado en un abarcativo Año de la Orientalidad, la Dictadura sacó a los espacios públicos las festividades y entró en los círculos privados de los uruguayos con la consigna clara de ensayar «la intervención de un modo de ser uruguayo a partir de la creación de una mística de la orientalidad» (Martínez, 2007: 45). Una nueva etapa fundacional, a base de festividades en las distintas fechas patrias, significó que Bordaberry como jefe de Estado diera discursos en varios espacios.

La situación económica favorable en los primeros dos años de Dictadura «llevaron a que en febrero de 1975 los generales se decidieran a no convocar a elecciones» (Demasi, 2022: 258). A esto se suma que el año de 1974 terminó con la aparente unidad golpista, retratada en la fotografía del entierro del coronel Trabal. En el segundo mes del

año, el día 2 de febrero de 1975, Bordaberry da su apoyo a los militares al decir que no existen «rehenes en Uruguay», en respuesta a la denuncia de Kenneth James Golby. Dos días después, la COMASPO hace saber cuáles serán las condiciones para la apertura política, marcando la nueva temporalidad de la acción, los participantes en la nueva institucionalidad y las bases de una «reforma de la Constitución que estableciera la prohibición del marxismo y definiera las nuevas funciones de las Fuerzas Armadas [sumando] que las primeras elecciones serían con candidato único» (Demasi, 2022: 258). La continuidad de Bordaberry en el Gobierno parecía ser la mejor opción que los jefes militares tenían; era la figura *natural* de una dictadura donde los uniformados (con sus disidencias) manejan los hilos. Pero Bordaberry no sentía el apoyo de todos los generales. Las facciones internas, la conducción económica esbozada por los uniformados y el accionar de dejar a Bordaberry como el rostro civil (yendo como representante del Uruguay al extranjero), mientras la JCJ y los organismos militares se encargaban de la conducción del Gobierno, generó rispideces que molestaban al dictador, al tiempo que sus respuestas molestaban a los altos mandos militares.

La interna militar llegó al Año de la Orientalidad con una serie de reacomodos que transformaron los vínculos entre los jefes y el dictador. La destitución de Hugo Chiappe Posse y el asesinato del coronel Trabal dieron forma al año. Lo primero (sucedido en mayo) tuvo como motivo central los ya mencionados conflictos sobre la conducción económica entre el estatismo militar y el «más violento liberalismo» encabezado por Végh Villegas, explicaba el general Fernán Amado (Lessa, 2009: 304). A esto se sumaba el problema sustancial sobre lo que sucedería en 1976. «Chiappe aspiraba a ocupar el cargo de presidente del régimen sin renunciar a la comandancia del Ejército» (Rey, 2022: 241), algo que en palabras de Amado molestó a varios uniformados. Una junta militar era algo esperado, pero con la figura predominante del comandante en jefe del Ejército como jefe de Estado y el desarrollo de caudillismos no era del agrado para los jefes militares. Los conflictos entre Chiappe Posse y el resto de los uniformados conocieron otros elementos que propiciaron su salida. El entonces comandante en jefe, con apoyo de Bordaberry, buscó la destitución de los hermanos Zubía. Eduardo Zubía, jefe de la región militar n.º II, no escondía sus discrepancias con el dictador. Pero la jugada entre Chiappe y Bordaberry no obtuvo los resultados esperados; los Zubía eran hombres de Cristi, su destitución significaba enfrentarse a uno de los generales con mayor apoyo dentro de los altos mandos y cabeza del OCOA. La victoria en este caso fue de la facción ultranacionalista. Con los acercamientos de Chiappe con los «profesionales de la política» vinculados al pachequismo y con un Pacheco apoyando «la destitución de los comandantes», el nombramiento de César Vadora en la comandancia del Ejército se tradujo en una purga «a la corriente militar [vinculada] a Pacheco» (Rey, 2022: 242). Bordaberry quedó a merced de la facción ultranacionalista, encabezada por Cristi, Vicente Queirolo, Eduardo Zubía y el novel comandante en jefe.

La experiencia del caso Chiappe Posse fue una victoria de los «duros», que se reflejó en la Ley Orgánica militar de ese año. Su entendimiento del Ejército y de las FF. AA. como una institución metafísica que responde solo a los intereses de «la Nación» quedó plasmada en los lugares que los jefes militares ocupaban en las Juntas de Oficiales Generales (JJ. OO. GG), como en los mecanismos de ascenso, estableciendo la suba mediante la selección de los generales a los coroneles en actividad, reduciendo la selección a una votación netamente corporativa. «El mecanismo [...] preservaba contra eventuales intentos de caudillismo militar. El liderazgo de jefes carismáticos quedaba prácticamente anulado por el cumplimiento automático de las normas sobre retiros obligatorios» (Rial, 1986: 30). Los mandos de las regiones daban a sus jefes espacios para el ejercicio del gobierno en las instituciones creadas por los militares, como también para la negociación y construcción de alianzas con el resto del elenco golpista. En ese sentido (para la lógica de esta corriente uniformada) se daba un razonable equilibrio de poder en una especie de colegiado castrense.

El segundo suceso que marcó la interna militar fue el asesinato en París (el 19 de diciembre) de Trabal por onfianza del general Queirolo [hombre de Cristi]» (López Mazz,

2022: 128). El entierro acercó a grupos en disputa en una aparente unidad: sea entre facciones militares (los Tenientes de Artigas y lo0 de junio) mostraban la cada vez mayor cercanía entre conflictos y su salida del ámbito del *lobby* al espacio público. En este ínterin Bordaberry se entrevistó en suelo uruguayo con el dictador brasileño Ernesto Geisel, a partir de lo cual afirmó que esa reunión partidarios de Álvarez), como de uniformados con los círculos de Bordaberry. Pero el transcurso de 1975 desmoronó la artificial unidad, teniendo al dictador en búsqueda de apoyos en la FF. AA.

Los discursos del dictador mostraron la necesidad que tenía de agradar a los jefes bajo una retórica que los invita a negociar. El 19 de abril, en su presentación en La Agraciada, vuelve a dar su apoyo mencionando que las FF. AA. «han salvado a la Patria» y estas «no pueden ser juzgadas». Pero este apoyo venía acompañado de lo que para el dictador era el deber ser de la institución militar: ser «garantes de la supervivencia de la Nación, de sus principios y de la consecución de sus grandes objetivos [...] [además de ser el] sustento del gobierno civil y de su autoridad» (JCJ, 1978: 335). Lo interesante del discurso radica no solo en los distintos mensajes dejados para las FF. AA., en los que comienza a delimitar su campo de acción, sino en que también es un aviso a los políticos que tenían la +idea de retornar al sistema de partidos anterior a la «excepcionalidad» del golpe.

Los sucesos de mayo (con la destitución de Peile y la reunión en Boiso Lanza) y la presentación del primer memorando (fechado el 1 fue «una respuesta a los violentos» poniendo énfasis en «los profetas y actores de la guerra subversiva y terrorista», quienes «pugnan por destruir todo en su lucha por el poder, sembrando en su camino al odio y excitando las potencias más sombrías del hombre». Para esto es imprescindible el entendimiento y cooperación entre los países del Cono Sur, con un pasado común, en los que la tranquilidad se vio puesta en peligro por el marxismo internacional, lo que dio como resultado los «procesos comunes» y el «sentido del propio proceso político del Uruguay de hoy, encabezado en una renovación profunda» que hizo frente a «la demagogia corruptora» encarnada en los partidos políticos, los que, a su vez, eran lugar de acción para la subversión (*La Mañana*, 10 de junio de 1975: 4).

A los ojos de las dos fuerzas mayoritarias del Ejército se entendió de distintas formas. Para los cercanos a Álvarez la actitud fue de desconfianza. Mientras que para la «línea dura» existió una actitud dubitativa. El general Cristi (presidente de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de los Hechos Históricos de 1825) no compartió muchos actos y festejos en conjunto con el jefe de Estado.⁶ Resulta llamativo dada la afinidad ideológica y el pasado común en la Liga Federal de Acción Ruralista. Un ejemplo paradigmático fueron los sucesos producidos en los festejos por el 211º aniversario del natalicio de José Artigas: mientras que los generales Cristi y Eduardo Zubía estuvieron en el cambio de nombre a la ruta 3 por General José Artigas, Bordaberry se presentó en el pueblo de Sauce junto a algunas autoridades militares, el ministro de Educación y Cultura Daniel Darracq y distintos integrantes del ruralismo. Mientras que en el desfile en honor a la repatriación de los restos del dictador Lorenzo Latorre, Cristi «tomó del brazo [a Bordaberry]» y lo sacó al palco a saludar a la multitud (Campodónico, 2003). Esto permite entender que algunos militares vivieran con preocupación la mediatez del mandatario, mientras que otros tomaron distintas posiciones que por momentos parecen despreocupadas.

Los festejos de 1975 fueron el espacio para que Bordaberry marcara distintas premisas de su «democracia cristiana», con eje en el rol de las FF. AA. y los partidos políticos. Tomando distancia de la figura de Pacheco, todo 1975 construye un campo de acción donde el dictador cobró autonomía del líder colorado y de los jefes militares, utilizando la plataforma de los actos para mostrar el crecimiento popular que tuvo su figura en relación con los militares. Medir con exactitud el respaldo de un dictador es prácticamente imposible por las propias características de una dictadura de la Seguridad Nacional. La afirmación de que J. M. Bordaberry, entrados en 1976, era la figura popular de la Dictadura en contraposición con el otro elemento gobernante (el

castrense) se basa en el material audiovisual del régimen, en los números comparativos de participación en los actos donde aparecía la figura del dictador y en las memorias de los contemporáneos.

Cada uno de estos recursos presenta serios problemas para desarrollar una narrativa sobre el pasado. Los documentos audiovisuales de la Dictadura buscan demostrar el apoyo del polo civil al régimen como legitimante; las formas de grabar, los ángulos, los distintos usos de planos, el montaje de las imágenes, todo construye un relato que nos dice más sobre el emisor que lo que se nos está enseñando en los videos. La concurrencia medida por medios oficiales, en este caso *La Mañana* y *El País*,⁷ «250 mil personas presenciaron los actos realizados [el 25 de Agosto]» publicaba en primera plana el vocero ruralista (*La Mañana*, 26 de agosto de 1975: 1). Los voceros del régimen no van a reducir los números, por lo que sus datos pueden estar exagerados, mientras que la prensa en el exilio tiende a lo contrario. Y las memorias son las más complejas ya que nos dicen más de cómo el sujeto entiende ese pasado en su presente, que su noción en ese propio pasado. Asimismo, la forma de la experiencia vivida tiende a la universalización de cómo se vivió ese hecho, aunque un trabajo pormenorizado en base a las memorias puede ayudar a construir una narrativa que tenga presente las dificultades establecidas por ese tipo de documentos. Además, es difícil discernir sobre la heterogeneidad de motivos por los que las personas concurren a los actos y festejos; muchos vieron allí espacios para poder salir a la calle, pequeños espacios de libertad, otros eran obligados por el ámbito educativo/institucional, también se dieron casos de abierto apoyo al régimen (Marchesi, 2001).

El 6 de junio los uniformados dieron a conocer su proyecto al dictador. Bordaberry meditó su respuesta, la cual fue conocida por la JCJ en la segunda semana del mes. La situación tuvo su primer gran choque a mediados de 1975, los altos mandos militares se reúnen con el presidente de facto estableciendo un problema que deben resolver antes de 1976, la continuidad de Bordaberry como cara visible del «proceso». Tanto los militares como el dictador tenían presente que 1976 (en teoría) era año de elecciones y el mandatario dijo que «no estaría ni un minuto más de lo que le correspondería en el gobierno». En respuesta a la reunión, Bordaberry entregó a los uniformados el catalogado como su primer memorando. Fechado el 10 de julio, el dictador manejó una discursiva dubitativa, intentando leer los tiempos de los militares, exponiendo que «no tiene un panorama totalmente claro y definido en todos los aspectos del plan político [...] [mientras que] su permanencia es un factor secundario frente a la necesidad de definir el objetivo político» (Bordaberry, 1975a: 2). Pero finaliza el memorando diciendo que del «conjunto de decisiones que en estos temas adoptemos [...] [es decir, de crear] una nueva legitimidad nacida luego del 27 de junio de 1973 [o no] [...] dependerá mi decisión personal» (Bordaberry; 1975a: 11). Contradiendo lo dicho en junio del 73: «Solo entregaré la responsabilidad presidencial a mi sucesor electo libremente en los comicios que se realizarán en la fecha que marca la Constitución».

El dictador no es claro a la hora de definir su proyecto. Existe un tema que preocupa dentro de la interna militar, y no es el futuro de los partidos. Se ha generalizado la idea de que la JCJ perdió confianza en Bordaberry por la propuesta del jefe de Estado para eliminar los partidos políticos por corrientes de opinión. Dicha visión que se ha establecido reduce los fenómenos históricos de la Dictadura a una dicotomía entre las FF. AA., garantes de una conceptualización de democracia con eje en el accionar de los partidos políticos (depurados), en contraposición con Bordaberry, representante de la reacción más antidemocrática y antisistémica. Dicha concepción es errónea por todo lo sucedido en los primeros tres años de Dictadura, en que Bordaberry en más de una oportunidad ha llamado «al tiempo de la Nación y no de los partidos políticos», frente a los altos mandos. Si esta concepción partidocrática de las FF. AA. fuera real cabe preguntarse qué los llevó a demorar tanto la destitución del mandatario y por qué durante 1975 establecen espacios de diálogo con Bordaberry.

La heterogeneidad del cuerpo castrense denota que existieron efectivos afines a la

eliminación de los partidos políticos. Los vicios generados en torno a estos, como el clientelismo, la caza de votos, el enriquecimiento mediante el uso de las herramientas del Estado, los denominados «ilícitos económicos», como el caducado modelo tripartita en la división de poderes, fueron justificaciones más que suficientes para compartir las ideas *bordaberrianas*. El ejemplo paradigmático lo encontramos en el mencionado Cristi y la logia Tenientes de Artigas, la «línea dura» o «brasileños». «Esta corriente más reducida [...] y representada fundamentalmente entre los más altos rangos militares de la jerarquía militar, estaba formada por los partidarios de un nacionalismo conservador inspirado en otro modelo continental: el de Brasil» (Jalabert D'Amado; López Mazz; Merklen, 2022: 24). Afines a las ideas de Bordaberry, no solo en la concepción de los partidos políticos y el ordenamiento de los poderes, sino también en el espejo a seguir, la dictadura de Brasil.⁸ Por lo que puede concluirse que la eliminación de los partidos no fue el eje para remover a Bordaberry del Gobierno, entonces surgen nuevas interrogantes acerca de qué elementos compartieron todas las facciones militares para aprobar la destitución.

El relacionamiento público entre militares y Bordaberry merece ser tratado como un tema aparte. La prensa oficialista dice mucho en sus palabras pero más en la selección de los temas y en sus silencios. Durante el primer semestre de 1975 el vocero de la Dictadura, *La Mañana*, fue acrecentando la exposición de los sucesos producidos en el gobierno de Isabel de Perón. Desde agosto las noticias sobre la situación política en Argentina ocupaban mayoritariamente la primera plana, variando con los logros deportivos de la selección uruguaya, las inferiores y la presentación de equipos futbolísticos uruguayos en el exterior. Resulta extraño que en el correr del segundo semestre la aparición de Bordaberry y los altos mandos militares en los mismos actos es más notoria; el vocero del régimen hace hincapié en la mención de los distintos militares que acompañaron al mandatario. En la inauguración del edificio de servicios de Asistencia Social Policial el 5 de agosto, Bordaberry estaba rodeado de los altos mandos; *La Mañana* destaca la presencia del general Esteban Cristi en el acto (*La Mañana*, 6 de agosto de 1975).

El nuevo carácter de la retórica *bordaberriana*: la Revolución nacional»

Hasta diciembre de 1975 los discursos del dictador (tanto en el ámbito nacional e internacional) eran conocidos por los jefes militares. Con la presentación del primer memorando Bordaberry expone los problemas que deberán enfrentar siendo gobierno para el futuro que les espera en relación con su presente; es decir que acumulando experiencias del pasado (con la amenaza marxista y la crisis política) en «un pasado presente, cuyos acontecimientos han sido incorporados y pueden ser recordados» (Koselleck, 1993: 338). Bordaberry delimita mediante su experiencia sus expectativas para desarrollar discursivamente su «horizonte de expectativas». Esto es algo que todos los integrantes de la alianza gestaron. Tanto los militares como los integrantes no uniformados del régimen apelaron durante los casi doce años de dictadura a justificar las prácticas genocidas (Feirestein, 2014) y del terror a partir de los problemas previos al golpe, con la sedición primero y la subversión después. Todos tendieron a formular visiones (similares en varios sentidos) sobre el futuro del «proceso». Tal vez lo llamativo del discurso político bordaberriano radica en desplegar un abanico conceptual (no novedoso en la reacción uruguaya) y presentarlo como un proyecto, por capas, viable en la realidad histórica de la década de 1970. Hasta el segundo memorando la retórica del dictador poseía un carácter plurívoco, dejando en los militares interpretaciones y construcciones de espacios discursivos para la gestación de consenso o puntos comunes entre los golpistas.

Para el 9 de diciembre Bordaberry hizo llegar a la JCJ un segundo memorando, concentrando en gran medida interpretaciones conceptuales unívocas. Visto desde el hoy, y siendo comparado con los otros escritos (a excepción de *Las Opciones*), puede

afirmarse que el presentado a finales de 1975 trae consigo los elementos más interesantes. El dictador ordena su pensamiento de forma clara, denotando la radicalidad reaccionaria y marcando la cancha a los militares sobre futuras negociaciones. Conformado por cinco puntos centrales: «Posibilidad de elecciones generales», «La posibilidad de un plebiscito en noviembre de 1976», «Las Fuerzas Armadas», «Líneas básicas para la nueva Constitución» y «Las políticas». En los distintos discursos su contenido puede entenderse dependiendo del receptor y sus características, se invoca a los «orientales», «al pueblo uruguayo», a los católicos e incluso a las FF. AA. A diferencia de este tipo de textos políticos que tienden a variar el sentido en relación con el heterogéneo grupo que conforman sus destinatarios, los memorandos funcionan de forma distinta. Por su carácter secreto tienen un destinatario definido: los altos mandos militares. Conociendo al receptor puede extraerse el sentido del texto y sus usos conceptuales en dos objetivos centrales: la presentación de las ideas del dictador y su programa (Bordaberry lo reafirma en el documento en más de una oportunidad). De allí su carácter unívoco, enmarcado en el convencimiento a las FF. AA. para lograr su apoyo como corporación. El quiebre producido el 9 de diciembre de 1975 es la transformación de un discurso plurívoco a otro que rompe cualquier entendimiento tácito.

El documento inicia respondiendo al primer memorando y la cuestión en disputa: el año electoral. Bordaberry es claro al decir que: «Es imposible pensar en la realización de elecciones dentro del año 1976», justificando que «los Partidos Políticos no están preparados para volver a asumir la conducción pública; están en un receso obligado y abrigando la esperanza de un retorno integral a la situación anterior con todos sus vicios y riesgos». Esa «convocatoria a elecciones generales es impracticable en las circunstancias actuales» donde los peligros pueden resurgir, ya que la aparente falta de libertad puede justificar en los defensores del liberalismo un llamado a una «convocatoria con absoluta libertad» (sin partidos de izquierda), lo que dejaría por fuera a «determinados ciudadanos o sectores políticos» que no busquen sufragar. Fortaleciendo a los elementos marxistas infiltrados en los partidos políticos, «la oposición tanto interna como externa» traería consigo la «limitación a las personas o a los Partidos [...] [y esto] sería solamente un ajuste secundario a un sistema cuyos defectos deben ser atacados frontal y profundamente».

El ajuste del sistema debe pensarse en una realidad donde la presencia del marxismo «ha introducido un elemento que cuestiona toda la organización política vigente en el mundo Occidental hasta la fecha» y los partidos «no constituyen una defensa suficiente contra ese peligro por cuanto rápidamente sustituyen el objetivo nacional por el partidario» (Bordaberry, 1975b: 1 y 2). Allí radican los puntos sustanciales del documento: el no llamado a elecciones, los problemas del sistema liberal y los partidos que, por su propia naturaleza, no son capaces de hacer frente a la «nueva amenaza», y la necesidad de «plebiscitar» el futuro del «proceso», como también los peligros que corren las FF. AA. al ser juzgadas. En ellos radica uno de los temas más interesantes: el llamado a elecciones en noviembre de 1976 que «involucraría inevitablemente un juicio a las FF. AA.». Para Bordaberry esto es inaceptable ya que: «La situación actual de las FF. AA. en la función pública no es consecuencia de un plan premeditado, sino de una situación de hecho que se ha venido desarrollando en los últimos años». Y ellas son las que «han de retener en realidad el Poder, no para su ejercicio directo sino para la vigilancia de los valores esenciales de la Nación» que, junto con parte de la conducción económica, son los espacios de poder ejercido por los uniformados.

En la lógica *bordaberriana*, el régimen en sus condiciones actuales corría el riesgo de contraer los vicios pasados que llevaron irremediamente al «proceso comprendido entre febrero y junio de 1973 [...] [donde el poder] pasó de los Partidos Políticos a las FF. AA.». Y el ejercicio del poder en una institución como las FF. AA. es problemático en su propia naturaleza. «El ejercicio del Poder desgasta» —menciona Bordaberry— y divide. Una institución como las Fuerzas Armadas (predestinada en su misión de «vigilancia» de la Nación) no puede permanecer en el poder en las condiciones actuales. El peligro de que los uniformados vean «juizado su prestigio en forma corporativa» podría llevar a

«responsabilizar a las FF. AA. por la gestión pública como si fueran un Partido Político», generando «un círculo vicioso [que] las induce a intervenir cada vez más», planteando desconfianza y «limitando la cantidad y el nivel de los civiles dispuestos a ejercer la función pública en condiciones tan difíciles» (Bordaberry, 1975b: 1-2-3-4). Implicando cuestionamientos a una institución con objetivos de índole nacional. La lectura de los sucesos de febrero de 1973 por parte del dictador nos muestra un panorama donde tanto políticos como jefes militares legitiman a las FF. AA. bajo el funcionamiento de parámetros político-partidarios.

Las aristas mencionadas son heterogéneas pero con un patrón común: el convencimiento (tanto militar como luego de la población en general) y el planteamiento de una alternativa, de un nuevo modelo que no corriera los riesgos de las democracias liberales. Bordaberry es hábil al mencionar los sucesos de febrero. La mención no es casual, el verano de aquel año lo muestra como un presidente vencido frente a los uniformados. El pedido de apoyo popular desde el Poder Ejecutivo sin la obtención de respuesta, la «rebelión» con los comunicados 4 y 7, los acuerdos de Boiso Lanza y la creación del COSENA son victorias militares en la pugna del ejercicio de poder frente a su persona.

Igualar febrero con la disolución del Parlamento es equiparar la alianza golpista y su accionar a nivel de importancia en la gestación del «proceso». El mandatario apunta a que los sucesos de febrero y junio de 1973 son el final y el inicio de una nueva etapa en la historia nacional. La equiparación funcionaba no solo como un convencimiento para aplazar las elecciones y plantear un nuevo sistema, sino que esta tuvo la idea de funcionar como una distribución de fuerzas para mantener el régimen de forma armoniosa. Esto cobra mayor sentido cuando se constata que hasta hace no muy poco Bordaberry y sus congéneres remarcaban el 27 de junio como el quiebre e inicio de la Revolución nacional. Reacomodar la alianza siempre proponiendo y los militares respondiendo; igualar ambas fechas con el resultado de sus acciones fue parte sustancial en la discursiva para el convencimiento y la necesidad de una nueva alianza presente ante el *año clave*.

El dictador es consciente de que 1976 puede cambiar todo, sabe que la población uruguaya tiene la costumbre de ir a las urnas, y la situación de aplazar las elecciones plantea dos grandes puntos. Llamar a comicios electorales sería un error —explica Bordaberry— por lo esgrimido anteriormente. El simbolismo de las elecciones es un juzgamiento al accionar castrense y «las FF. AA. no pueden ser juzgadas por un pronunciamiento popular» por su propia naturaleza de defender «la Nación». Los fenómenos ulteriores en los que participaron los uniformados no fueron pensados bajo la lógica política, sino que respondieron al compromiso «económico y social [...] inseparable ese juicio del veredicto de las urnas» (Bordaberry, 1975b: 1).

La influencia del jurista nacionalsocialista Carl Schmitt se presenta en distintos puntos tratados en el memorando. Sobre el rol de las FF. AA. la idea de Bordaberry funciona en base al sustento de que son parte de algo superior a las fracciones sociales que generan los partidos y que tienen su reflejo en el sufragio, es decir, los partidos políticos. Los planteamientos de Schmitt parten del supuesto de que existe una «ecuación política [que iguala el valor conceptual de la política con la] política de partido se hace posible cuando empieza a perder fuerza la idea de una unidad política» (Schmitt, 1932: 62). Es decir, se fractura el Estado totalitario, y en el caso de Bordaberry se rompe el orden nacional. El tema de los partidos políticos (eje vertebral del proyecto) lo tratará luego de establecer la importancia en el manejo de los tiempos que tienen desde el Gobierno para no demorar los comicios, ya que esto llevará a «la opinión pública [...] a preguntar cuándo será la nueva convocatoria», radicando en esto uno de los problemas sustanciales: «todo el sistema está cuestionado y no plantearnos ahora ese cuestionamiento supone volver a encontrarnos dentro de algún tiempo frente a una disyuntiva a la que hoy nos enfrentamos» (Bordaberry, 9/12/1975: 2). Retomando la cuestión de la «excepcionalidad uruguaya», plebiscitar una nueva Constitución parece ser el mejor camino según lo

entienden todas las alianzas golpistas. Bordaberry no es menos al entender que lo obtenido por el «proceso» y los elementos presentados en sus memorandos deben quedar legitimados en el texto constitucional.

Durante los tres años de Dictadura, el mandatario creía en el aumento de popularidad que tuvo su figura frente a los militares. Esto parece haberlo convencido de que su proyecto tendría el apoyo popular suficiente si lograba explicarle a la población con una «razonable anticipación» que «realizar un plebiscito [con el objetivo de] prorrogar el mandato del Presidente» sería la mejor opción. Si los militares lo aceptaban, Bordaberry «no podría separarse de la instauración del nuevo régimen de poder», donde estaría «dispuesto a proporcionar y afrontar un plebiscito que recaiga directamente sobre el aplazamiento de las elecciones y sobre una prórroga de mandato», plebiscitada allí una nueva Constitución. Pero «en el caso de que las FF. AA. no estuvieran dispuestas a aceptar [...] [el mandatario estaría] dispuesto también a continuar en el ejercicio del cargo sin su realización» (Bordaberry, 1975b: 4). Los deseos de mantenerse como figura presidencial son claros; en ambas posiciones planteadas su continuidad frente al «proceso» resulta sustancial, ya que volver al sistema anterior sería impensable ante las nuevas reglas que plantea el marxismo internacional. Llevar la DSN a nuevos alcances funcionaba como parte de uno de los ejes vertebrales del *bordaberrianismo*, su proyecto no puede ser pensado sin tener presente la idea de la defensa de determinados valores y agentes naturales (como la familia), justificados en el catolicismo ultramontano y trinitario, valores que fueron puestos en riesgo por un enemigo oculto en las instituciones y formas de organización social de la democracia liberal, e incluso del propio régimen dictatorial, de ahí la radicalidad de su proyecto en este sentido.

Toda la parafernalia de Bordaberry para justificar su mantenimiento dentro del Poder Ejecutivo cambia lo dicho en el primer memorando, donde «su permanencia es un factor secundario». La necesidad de plebiscitar una nueva Carta Magna legitimante del *bordaberrianismo* es el elemento radical para lograrlo, y ello depende sustancialmente del apoyo uniformado y de la aceptación de la delimitación que el presidente de facto marca en el rol de las FF. AA. Estas «deben pronunciarse sobre la posibilidad de que se instaure un nuevo régimen de poder». Ellas constituyen «el sustento del Gobierno en sustitución de los partidos políticos». En sus conclusiones menciona que el «Poder [...] debe continuar estando en las FF. AA.», pero su «ejercicio en cambio, no debe continuar involucrado corporativamente», ya que ataca su «misión fundamental» de proteger las bases de la «Nación», ergo, el poder radica en ello, pero el ejercicio de este no puede estar en sus manos. Si los militares siguen gobernando, su propia naturaleza como garantes de la seguridad nacional será puesta en peligro ante los factores de «división entre las mismas Fuerzas, o entre ellas y los civiles» (Bordaberry, 1976b: 11); siendo esto inaceptable para quienes cumplen tareas titánicas como las FF. AA. La relegación de los uniformados a tareas de vigilancia molestó tanto a los militares con apetito político (como es el caso del general Álvarez) como a los antipolíticos. De esta forma, la JCJ compartió la necesidad jurídica, no así la eternización de Bordaberry como jefe de Estado, y menos en un contexto en el que los uniformados quedaban relegados a tareas de vigilancia.

Los lineamientos para la Constitución *bordaberriana* funcionaron como «la necesidad de definiciones mucho más profundas que una simple táctica frente a las instancias que marcan nuestras actuales normas electorales», que parte del elenco golpista exigía. La nueva Carta Magna «deberá ser flexible, de modo tal que el Gobierno pueda actuar eficientemente de acuerdo al bien común, para que de su acción se juzgue si es buena o mala, no ya si es o no “institucional”, como se hacía antes con intención paralizante» (Bordaberry, 1975b: 6). Una cuestión y acción moralizante daría funcionamiento a las nuevas instituciones, bajo el paradigma conceptual antinómico católico del bien y el mal, frente a la defensa y mantenimiento del «bien común», a diferencia de los tiempos ulteriores a 1973, cuando la única importancia desde la autoridad y el espectro político era conservar la noción de institucionalidad, aunque en la práctica ello no existiera. Resulta curioso que Bordaberry justifique esto cuando en 1972, junto a Álvaro Pacheco Seré, dio forma al Estado de Guerra Interno como un elemento

institucional y legitimante de la violencia estatal y el terrorismo de Estado. De igual forma que su concepción de la democracia, necesita un cuerpo legal justificando su funcionamiento.

Las premisas y concepciones filosóficas antiparlamentarias, antipartidarias y, si se quiere, antirepublicanas parecen ser tomadas de teóricos como Schmitt, de sus críticas al liberalismo y sus nociones del «poder constituyente», explicadas de forma burda por parte del mandatario. «La Libertad de la Patria, los derechos de la persona humana, el orden y la seguridad en la convivencia, la autoridad al servicio de la Nación» son los elementos a salvaguardar para el armonioso funcionamiento de la comunidad. Para esto, el «bien común y la conciencia nacional serán [...] objetivo y límite del Poder Público», ese poder «debe ser fuerte y nacional [...] de ahí que sólo las Fuerzas Armadas, por su naturaleza y misión, deben ser hoy sus custodios». Es decir, ese «Poder» originario recae en la propia institución militar para su defensa; si ellas priman por ejercerlo ponen en peligro las bases mismas de la «Nación», permitiendo que «el marxismo [encuentre] los caminos para su obtención gradual». Ante esto la comunidad encuentra el riesgo de su disolución (Bordaberry, 1975b: 6). Los militares son los vigilantes, no los ejecutores del poder; una vez más el discurso del dictador gira en torno a la delimitación del accionar militar. Ese «Poder Público es, por esencia, uno solo. Habrá diferentes funciones: la legislativa, desempeñada por un Consejo de Estado asesor y corrector de proyectos de ley y una administración de Justicia —no Poder— independiente [...] de juzgar». De esta forma, el *bordaberrianismo* expande su idea de que la división de poderes «perdió autenticidad cuando los representantes fueron integrándose al poder público o político» (Bordaberry, 1975b: 7). En 1980, en «Las opciones», Bordaberry expande la idea de este nuevo poder, y unas décadas después explica que este origen del mal radica en el cambio del orden producido en 1789 en Francia (Campodónico, 2003).

Quienes sí podrán ejercer el gobierno (es decir, el «poder público»), además del COSENA, sería un nuevo órgano, el Consejo Superior de la Nación, encargado de «la toma de las grandes decisiones políticas, cuya existencia posibilite ante cualquier peligro, una acción inmediata de las FF. AA.». Además, para la «sucesión presidencial» el nuevo organismo tendría intervención directa y «decisiva» en «defensa de lo esencial con la participación de la ciudadanía y la oportunidad de acceso a la función pública de todos los ciudadanos con méritos, capacidad y vocación para ello»; una selección de los *mejores* para «gobernar sin la presencia de intereses sectoriales [...] ni sindicales, ni económicos», donde los «partidos políticos serán corrientes de opinión autorizada, pero que no podrán llegar al poder por sus medios clásicos: reunión, prensa, etc.», ya que esos son los medios «que emplea el marxismo para ir tomando parcelas de poder [...] alegando para ello que son principios esenciales de la democracia» (Bordaberry, 1975b: 6). Se hace énfasis, nuevamente, en la responsabilidad del espectro político, la crisis que sufrió el país es originaria del «vacío de poder» que dejaron. Pero Bordaberry vuelve a redoblar la apuesta culpabilizando al sistema de la acción llevada a cabo por la subversión. Para esto, la eliminación del sistema de partidos no resulta algo descabellado, por el contrario, allí radica una de las raíces del problema. Las palabras del dictador vuelven a delimitar el rol de las FF. AA., pero ahora con la novedad práctica de la creación de un nuevo organismo por encima del COSENA, preconizando (una vez más) «el retiro progresivo de los militares en su ejercicio» (Lerin, Torres, 1987: 63).

Bordaberry sabe que la permanencia indeterminada de la figura presidencial, como su elección por parte de un «órgano superior» resultará extraño para parte de la población; la justificación radica en que «la designación [en el sistema anterior] la hacían unos pocos dirigentes de sectores políticos». En el nuevo modelo que «no haya libertad irrestricta de elegir varios candidatos es, precisamente, lo que impide los impulsos demagógicos y la subordinación a intereses partidarios del interés supremo», es decir, la selección de los partidos en realidad es limitante en sí, por su propia naturaleza creada para la división y el alcance del gobierno como la gran disputa. Además, las elecciones dependen «más de la publicidad, el dinero, las circunstancias económicas y aún la violencia y la coacción, que la desvirtúan gradualmente»; de esta forma, votar se «fue

degenerando en la ilegítima creencia de que, obtenido el triunfo electoral, se obtenía una “carta blanca” para contrariar la voluntad y los intereses nacionales. Eso no era ya democracia». Democracia y votar se vuelven elementos no vinculables en las premisas *bordaberrianas*, y como buen político, Bordaberry no tarda en utilizar ejemplos del pasado sacados de contexto para legitimar su discurso en bases ulteriores; «Sostener, además, que sólo el voto legitima el Poder es negar legitimidad a todos los gobiernos que existieron en el mundo hasta comienzos de este siglo, incluido nuestro régimen institucional de 1830» (Bordaberry, 1975b: 7). En este sentido, las monarquías absolutas u otros regímenes donde el voto es inexistente o restrictivo funcionan como ejemplos para obtener el fin mayor, preservar las bases de la nacionalidad.

Las definiciones presentes fueron tomando forma a lo largo de sus escritos; el memorando de diciembre de 1975 es el primero que no guarda cuestiones tácitas sobre el tema, e incluso tiende a remarcar puntos desde una perspectiva radical en relación con el último entregado a los altos mandos militares en 1976. Pronunciado a favor de un cambio completo sobre las instituciones, Bordaberry no solo remarca las acciones de las FF. AA., también la desaparición de los partidos políticos por «corrientes de opinión» espontáneas «que puedan influir en el Gobierno, caso del Opus Dei en España, de la corriente del actual ministro de Economía en Uruguay u otras». Los ejemplos utilizados no son ingenuos; como el caso del Opus Dei y su fundador, el sacerdote Josemaría Escrivá de Balaguer (defensor del régimen franquista y uno de los elementos activos del «blanqueo» de la Dictadura a nivel internacional), que junto a la Iglesia y las organizaciones como la mencionada formaron parte del bloque golpista en España. Estos elementos influyeron de forma activa en la experiencia de Bordaberry y su realidad.

Entrados en el quinto decenio del siglo XX comienza a utilizarse con cierta normalidad «el término “tecnócrata” [...] ministros que llegaron a sus departamentos por conocer muy bien sus materias». En sus memorias, Gonzalo Fernández menciona que: «Desde mis primeras conversaciones con Franco y con Carrero [...] elaboraron la lista definitiva, llegué a la conclusión de que su objetivo principalísimo era reunir un equipo de hombres eficaces y leales» (Fernández, 1995: 174 y 175).⁹ Algo que le resulta útil al dictador uruguayo, más aún cuando nombra a Alejandro Végh Villegas y al grupo de tecnócratas que se conformó alrededor de su figura. La mención a Végh no es en absoluto casual; acrecentar otras alianzas golpistas fue uno de los objetivos que el dictador quiso disponer durante todo 1975. Compartir una línea común en las políticas económicas generaba un acercamiento con el ministro que a la vez los batía en retirada con los procedimientos en materia económica de los uniformados.

Los cambios sistémicos producto de la Revolución de 1973 tuvieron claras influencias de las nociones *solidaristas* de José Antonio Primo de Rivera y del falangismo. En el primer memorando entregado a la Junta de Comandantes en Jefe, el mandatario esboza algunos lineamientos sobre determinados movimientos sociales, entre ellos los sindicatos. El memorando de diciembre de 1975 explica que «la huelga debe desaparecer como un derecho, dado que, como la guerra, no es un derecho, sino un hecho». La comparación bélica responde a que en la lógica bordaberriana tanto la guerra como la huelga frenan la productividad, es decir, afectan «la armonía entre los dos factores de producción» (Bordaberry, 1975b: 9) atacando las bases esenciales de la Patria. Además, ambas acciones no son producto de los derechos, que son la «vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad» (Bordaberry, 1975b: 7), que podemos catalogar como los derechos naturales para el bordaberrianismo. La simbiosis entre el iusnaturalismo y los derechos adquiridos en el ideario del dictador tienden a encontrarse entremezclados y justificados en premisas religiosas e interpretaciones sobre autores como Locke y Hobbes (y sus interpretaciones), lo que da forma a los «derechos» cimentales del bordaberrianismo. Y es que en dicha lógica, al igual que en los partidos políticos, los sindicatos priman por «intereses particulares», y dentro de la lógica falangista a la que afilia Bordaberry, la Nación funciona como «una unidad de destino en lo universal. Toda conspiración contra esa unidad es repulsiva» (J.O.N.S. 1934: 1). «Los Sindicatos serán profesionales y no políticos» —explica el mandatario—, ya que «al no existir la lucha de

clases no existirá oportunidad de desviar su finalidad». Al funcionar como organizaciones profesionales, su finalidad «deberá afirmarse a través de la formación de líderes sindicales en los que se inculcarán los principios de armonía entre capital y trabajo y de supeditación del interés sectorial al interés general». Además, «El Estado deberá estar por encima de los intereses particulares tanto de capital como de trabajo» (Bordaberry, 1975b: 9). Resulta llamativo advertir cómo logra realizar la unión entre elementos discordantes y antagónicos, como la herencia del primer batllismo sobre el rol del Estado frente a los conflictos entre el capital y el trabajo, con la Doctrina de Seguridad Nacional y el falangismo, en su matriz anticomunista, y la noción de la unidad nacional. Los sindicatos serán una herramienta del Estado conformada por los más capaces para lograr el real equilibrio dentro del binomio trabajo-capital, sin «desviarse» por «intereses particulares».

¿Qué fue el bordaberrianismo?

El uso de las «metacategorizaciones» de Bordaberry no se remite únicamente a trasladar sus influencias al plano histórico de 1975 y 1976. El cúmulo de experiencias familiares,¹⁰ como empresario del campo y político, dio como resultado los primeros indicios del modelo que llamamos bordaberriano, el que responde a continuismos del conservadurismo y la reacción de los años de 1930 y 1940, principalmente al terrismo y al blancoacevedismo, como también a ciertas características de los fascismos (principalmente el falangismo). Pero la cuestión bordaberriana es algo distinto, algo nuevo a los movimientos políticos que le precedieron. En la consolidación de la democracia cristiana los elementos que genealógicamente le dieron forma no determinaron su caracterización dentro de ellos. Aunque la formación del mandatario dentro de la LFAR y las particularidades de este movimiento permiten entender al bordaberrianismo como una ramificación adaptada a la experiencia histórica de la dictadura al ruralismo.

El ordenamiento establecido por Domingo Bordaberry, Benito Nardone, Faustino Harrison y José Gari tuvo como base las agremiaciones rurales. Estas levantaron el estandarte de la familia rural, elemento que para el bordaberrianismo cumple una doble condición: la idea de la familia como unidad básica de la nación, a la que se agrega el carácter rural, lugar donde no solo se conformó la nacionalidad sino también la riqueza de la patria. El campo y la «identidad rural [funcionó como un catalizador] por encima de las identidades de partido y de clase, construyó sobre ella un imaginario de virtudes económicas, sociales y morales» (Moraes, Juncal, 2022: 89). Construyendo un pasado y una tradición común en la que el papel de la ciudad es el de consumidor de las riquezas del interior y de las desviaciones morales. Allí se encuentra el Parlamento y los «profesionales de la política», elementos comunes de las derechas durante todo el siglo XX. Lo novedoso del ruralismo es su radicalización producto de la lógica establecida en el marco de la guerra fría. Pero, aunque Nardone y los círculos de la Liga realizaron una «interpretación económica de la historia uruguaya a partir de Artigas en la que deliberadamente mini[zaban] a los partidos políticos» (Jacob, 1981: 95), al igual que el ruralismo de la Federación aceptaban su valor como herramientas prácticas para alcanzar determinados fines. Bordaberry aprende estas experiencias entendiendo que el mal radica en el propio sistema de partidos; ergo, el ordenamiento social del ruralismo encuentra nuevos estadios que el dictador expone en sus memorandos. Uno de ellos fue el gremial (no sindical), que remite a premisas básicas del corporativismo. «La finalidad de la Liga de Acción Ruralista era esencialmente gremial» menciona el exmandatario, algo que la Asociación Rural y la Federación no lograron a nivel del ruralismo (Campodónico, 2003: 36 y 37). A lo que se suma la base política-social del ruralismo que el mandatario palpó como uno de los paradigmas de las corrientes de opinión: los cabildos abiertos. Los cabildos como formas de organización política, que paradójicamente fueron pensados como respuestas al quehacer político, eran la base orgánica del bordaberrianismo, traducida en las corrientes de opinión espontáneas, alejando los vicios de la política partidaria.

Bajo este parámetro el bordaberrianismo funcionaría como el cauce natural del ruralismo. Pero dicha afirmación cobra mayor sentido al entender la conceptualización de la democracia manejada por los ruralistas y por el joven senador Bordaberry. Una vez en el Gobierno, el ruralismo (en alianza circunstancial con el herrerismo) estableció una serie de medidas y performó un discurso que Bordaberry plasma en los memorandos sobre su modelo político y moral. En cuanto a la formulación de la democracia y el rol de las FF. AA. los consejeros ruralistas iban en el mismo camino que el dictador. Al decir de Faustino Harrison a los jefes militares de 1962 «a la democracia [había] que darle vacaciones». Nardone, un año antes en emisión por radio Rural, mencionaba que los políticos y el Gobierno (del cual formaba parte) eran «cocoliches» incapaces de formar un mando fuerte, que necesitaba «La República Oriental del Uruguay [...] y si [estos] no [se] saben hacer respetar, que lo diga[n] para que las fuerzas públicas armadas, tomen el gobierno que los civiles no saben representar» (Broquetas, 2014: 230).¹¹ Bordaberry como senador, ese año, en un cabildo abierto celebrado en San José mencionaba que «el problema aludido consistía en que el Gobierno no estaba atacando activamente al comunismo», situación en la que Francisco Boné «advirtió la necesidad de “ponerle las riendas al Parlamento”» (Broquetas, 2014: 230).¹²

El descreimiento de la democracia, y en este caso también de los propios partidos políticos, encuentra en los memorandos del 9 de diciembre de 1975 y del 1.º de junio de 1976 su punto máximo. Pero no fueron los únicos elementos que las figuras vivas del movimiento encontraron de forma positiva en la democracia cristiana explicada en los memorandos. La filosofía económica del dictador es un fiel reflejo de los puntos clave de la liberalización que se propuso el ruralismo como gobierno en respuesta a los años del batllismo y la competencia desleal que veían los integrantes de la Liga en las políticas proteccionistas y estatistas.¹³ E incluso, la propuesta de un quinto poder encuentra en el *bordaberrianismo* su interpretación con el Consejo Superior de la Nación y las atribuciones de este.

Las respuestas: la cronosofía de Végh Villegas y la acción militar

Las respuestas al proyecto del dictador resonaron dentro de la coalición golpista. La primera respuesta contundente y que tuvo influencias en la acción militar provino del ministro de Economía, Alejandro Végh Villegas. Végh inicia compartiendo casi todo lo expuesto por el mandatario, siendo «coincidente [...] en lo que se refiere a los aspectos fundamentales» (no llamado a elecciones y el rol de las FF. AA. «en el manejo de la cosa pública»), pero «discrepo [dice Végh] en un aspecto fundamental como es la extinción de los partidos políticos». Desde allí construye el eje vertebral de su crítica al *bordaberrianismo*. Si bien comparte la afirmación del dictador sobre el «receso obligado» en el que se encuentran los partidos, para el ministro, estos «no están preparados para reasumir la conducción pública», al menos por un tiempo. La importancia en la respuesta de Végh radica en los problemas generados en la «cronosofía» (Wallerstein, 1998), como en el desarrollo de las experiencias históricas de sus contemporáneos. Es la primera vez que el dictador obtiene una respuesta sobre su idea de eliminar los partidos por corrientes de opinión. Esta no vino de los militares, sino del ministro al cual entregó la conducción económica del país. Desde el presente los usos del pasado y las reducciones sobre la destitución parten del presupuesto establecido por Végh en el verano de 1976. Los meses transcurridos entre el 9 de diciembre de 1975 y el 12 de junio de 1976 llevaron a que la JCJ se apropiara del tema partidario como el detalle sustancial que generó la ruptura entre los uniformados y Bordaberry.

La experiencia histórica muestra que los desencuentros (presentes desde el inicio del golpe) empezaron a ser irreconciliables cuando el dictador comienza a especular sobre el rol que tendrían las FF. AA., a la par del crecimiento popular que los jefes militares observaron en el mandatario durante todo 1975. La misma realidad de la dictadura y sus

aliados llevó a cuestionamientos de índole económico, generando los casos paradigmáticos en los cruces mencionados con Bordaberry y Végh Villegas. El estatismo militar encontró su barrera en las claras tendencias neoliberales del dictador y su ministro de Economía. Sumado el apoyo de la CIA a la tendencia de estos últimos. La inutilidad y el despilfarro del erario público atormentaban los lineamientos fondomonetaristas de Végh. Pero no solo en materia económica los uniformados encontraron rispideces con el resto de los golpistas. En los «Objetivos nacionales» los uniformados dieron a conocer el proyecto de las FF. AA. La relegación de los partidos políticos hasta tener «las adecuadas condiciones de normalidad» fue compartida por todo el elenco golpista. Al menos en una primera instancia. Algo similar ocurrió con la aceptación de «limpiar» los partidos y gestar nuevos líderes no contaminados por la situación previa a 1973. Este cascarón institucional, entendían los militares, abría posibilidades para la especulación de los contemporáneos. El «receso obligado» que marcaba Bordaberry fue menester para los uniformados. La situación comienza a cambiar en el transcurso de 1975, llegando al primer mojón conocido en agosto de 1977 con el Plan Político Básico de la COMPASO. Para el elenco golpista fue mayor la importancia de un memorando previo, proveniente de la Comisión de Asuntos Políticos. Fechado el 3 de diciembre de 1976, bajo el número 1/76, la J.OO.GG marcaba la no realización de elecciones en 1976, tampoco realizar el plebiscito. Así comenzaba el rudimentario cronograma para que «inicie la etapa de reapertura política». Aunque en los hechos se entendió como la respuesta oficial de los jefes militares al último memorando de 1975 presentado por Bordaberry. Las FF. AA. mantendrían el «sistema de gobierno cívico-militar, con o sin prolongación del actual titular», en claro aviso a la radicalización del mandatario sobre el rol que debía cumplir el elenco militar en el ejercicio de gobierno.

El escrito castrense es la primera respuesta donde los uniformados utilizan la coacción discursiva de forma tan tajante, aplicando el uso de la fuerza, mostrando que en la práctica son ellos quienes tienen el control absoluto, marcando que el resto de las alianzas son circunstanciales frente a los militares en el Gobierno. Esto es algo que el dictador parece haber olvidado en diciembre de 1975. Es también el momento en el que se ve a los altos mandos unidos en causa común (desde los sucesos con Chiappe Posse no habían demostrado unanimidad similar). Bajo la premisa de una aparente mea culpa, la J.OO.GG realizó un detallado examen (que no explican) sobre los «errores y diferencias en que han incurrido los mandos militares» sobre la conducción del régimen. Esta falta de logros no es otra cosa que la no concreción de los Comunicados 4 y 7. La experiencia de los primeros años de la Dictadura, principalmente los sucesos transcurridos en 1975, dejaron varios aprendizajes en las FF. AA. sobre el evidente distanciamiento entre parte de la alianza no militar con la fuerza. Los comunicados eran —para los militares— la «base de la popularidad» (*Mate Amargo*, 13 de febrero de 1973) de la que gozaron frente a una parte importante de la ciudadanía. La popularidad perdida fue captada por el dictador, en el «aumento considerable de la popularidad del presidente». El mensaje de los mandos militares expone el desencuentro de la alianza golpista y la concurrencia de *lobbys* para tener el control del Gobierno bajo la misma lógica que funcionaba desde junio de 1973: un jefe de Estado y un vice que sean «hombres de confianza de las FF. AA.». El desarrollo de reuniones con otros elementos golpistas fue evidente.

Los militares supieron conducir las diferencias endógenas con los desencuentros de experiencias y expectativas presentes con el dictador, entendiendo que la eliminación de los partidos podía ser un suicidio político frente a la ciudadanía, aunque parte del cuerpo castrense se sintiera cercano a dicha idea. El uso de la «responsabilidad histórica» y la «reactivación de los partidos políticos en un segundo plano» abría posibilidades para gestar nuevas alianzas bajo los estandartes del proyecto militar y la posterior «democracia fuerte», en un «periodo transitorio» que marcaba el inicio del predominio total de los uniformados sobre el ejercicio de gobierno, aceptando en buena medida gran parte de las propuestas del exdictador.

Conclusiones

El sábado 12 de junio de 1976 la historia de la Dictadura uruguaya cambió: el jefe de Estado fue removido de su cargo, rompiendo de esta manera una de las alianzas más fuertes del *proceso*. La puesta en marcha que dio fin a la coalición originaria golpista fue fluctuante y encontró en distintas coyunturas altibajos. Entre 1974 y 1976 se desarrolló un elevado crecimiento de la

figura del dictador que para 1975 fue confirmada en la presentación de los dos primeros de sus tres memorandos. En el segundo, Bordaberry realizó un análisis sobre el devenir del régimen y las necesidades imperantes que él creía tenían los golpistas. La presentación del documento a la JCJ tiene relación con un tiempo de negociación que los uniformados dieron ante un Bordaberry distinto al de febrero de 1973.

La idea del mesianismo que tenía el dictador, junto a su concepción del rol de las Fuerzas Armadas llevó a que los jefes militares enemistados se unieran para concretar la salida anticipada del mandatario. En el ínterin, entre diciembre de 1975 y el 12 de junio de 1976, la voz de Alejandro Végh Villegas logró gestar una nueva alianza en la que el proyecto *bordaberriano* y el propio dictador quedarán —al decir del brigadier Paladini— «alejado[s] de la realidad» (Achard, 1995: 209 y 210). Aunque había sido compartido (salvado el rol de los uniformados) por varios jefes militares. Lo que Végh logró fue desarrollar la mayor «cronosofía» de los tiempos de dictadura: democratizar a las FF. AA. y que la «diferencia de principios» entre las partes funcionara como justificativo de los uniformados frente a la figura de Bordaberry y la reducción de su «democracia cristiana» a una concepción vacía, errónea y sin sentido del fascismo, centrando toda la atención en la eliminación de los partidos políticos y traspasando distintos tiempos.

Notas

1 No se debe confundir con la democracia cristiana vinculada al Partido Demócrata Cristiano. La aparición del concepto utilizado por Bordaberry se encuentra en los memorandos y en «Las opciones» (1980), donde la explicación del modelo propuesto es más explícita.

2 La cita pertenece a Bordaberry.

3 Sobre el escrito perteneciente a Demichelli no existe un análisis exhaustivo. Quienes (siendo contemporáneos) analizan brevemente la «utopía corporativista» son Francois Lerin y Cristina Torres.

4 El rol de la Coproin para Carlos Manini Ríos fue un tema de discusión permanente durante los primeros años de la Dictadura, apoyando la liberalización del mercado, pero a su vez presentando reminiscencias a la derecha anterior a 1960, resaltando el valor intervencionista del Estado.

5 Los documentos consultados de la CIA provienen de las desclasificaciones publicadas en <https://www.cia.gov/readingroom/search/site> [Consulta: entre septiembre de 2022 y junio de 2023].

6 El seguimiento de la prensa nos remite a dicha conclusión.

7 Los números manejados conciben con la encuestadora Gallup.

8 Bordaberry antes del golpe de Estado menciona en una entrevista realizada en Argentina que el gobierno brasileño es un ejemplo de «democracia». Aunque para 1979 maduró su pensamiento reaccionario, entendiendo que la experiencia brasileña, al igual

que la de todas las dictaduras del Cono Sur, se «plantea claramente entre el restablecimiento integral de la democracia liberal que, al contrario de aquélla, no ofrezca vías de entrada para el marxismo» (Bordaberry, 1980: 55).

9 En la página del Opus Dei (<https://opusdei.org/es-es/article/franco-y-el-opus-dei/>) puede encontrarse una serie de defensas e intentos de justificación por parte de la organización a su participación dentro del régimen franquista y su rol en la transición española. La cita anterior, y muchas otras, pueden encontrarse –sin contexto– a lo largo de un articulado que intenta funcionar como legitimante académico a la desvinculación parcial de la organización con la dictadura franquista. El enlace fue consultado por última vez el 20 de mayo de 2023.

10 Recordemos que Domingo Bordaberry apoyó el golpe de Estado en marzo de 1933 y en dictadura estuvo a cargo de *El Pueblo*, medio de prensa oficialista del terrismo.

11 La historiadora lo cita de *La Mañana*, 18 de agosto de 1961.

12 A su vez, la historiadora lo cita de Bruno, M. (2008): «Algunas operaciones de las bandas fascistas y de su conexión política». En *Cuadernos de la historia reciente. Uruguay 1968 – 1985*. N.º 5. EBO. Montevideo, pág. 48.

13 Aunque los empresarios rurales integrantes del movimiento (como Juan José Gari) reclamaron al Estado en más de una oportunidad subsidios, exoneraciones de impuestos e incluso rescates ante la bancarrota (Frega, 1993).

Anexo documental

- BORDABERRY, J. M. (1975a). *Primer Memorando*.
- (---) (1975b). *Segundo Memorando*.
- (---) (1976). *Tercer Memorando*.
- CIA. (21 oct. 72). *Uruguay: Se están desarrollando serias diferencias entre el presidente Bordaberry y la cúpula militar*.
- COMASPO (1974). *Política de la República*.
- (---) (1975). *Memorando nro. 1/75*.
- (---) (1975). *Memorando nro. 1/76*.
- Falange de las J.O.N.S. (1934). 27 puntos.
- VÉGH VILLEGAS, A. (1976). *Primer Memorando*.

Publicaciones de prensa consultadas

El Día
El País
La Mañana

Bibliografía

- ACHARD, D. (1995). *La transición en Uruguay. Apuntes para su interpretación. Cronología de los hechos. Testimonio de ocho protagonistas. Documentos inéditos*. Montevideo: EBO.
- BORDABERRY, J. M. (1980). *Las opciones*. Montevideo: Rosgal S.A.
- BROQUETAS, M. (2014). *La trama autoritaria. Derechas y violencia en Uruguay (1958-1966)*. Montevideo: EBO.
- BROQUETAS, M. y CAETANO, G. (2022a). *Historia de los conservadores y las derechas*

en Uruguay. *De la contrarrevolución a la Segunda Guerra Mundial. Tomo I.* Montevideo: EBO.

BROQUETAS, M. y CAETANO, G. (2022b). *Historia de los conservadores y las derechas en Uruguay. Guerra Fría, reacción y dictadura. Tomo II.* Montevideo: EBO.

BRUNO, M. (2019). Usos y sentidos del concepto democracia en Uruguay (1958-1989). *Políticas de la Memoria, n.º18.*

CAETANO, G. y RILLA, J. (1987) [2005]. *Breve historia de la dictadura.* Montevideo: EBO.

CAETANO, G. y JACOB, R. (1989). *El nacimiento del terrismo (1930-1933).* Tomo I. Montevideo: EBO.

CAETANO, G. (2021). *El liberalismo conservador.* Montevideo: EBO.

CAMPODÓNICO, M. A. (2003). *Antes del silencio. Bordaberry. Memorias de un presidente uruguayo.* Montevideo: Linardi y Risso.

CENTRO MILITAR Y CENTRO DE OFICIALES RETIRADOS DE LAS FF. AA. (2007). *Nuestra verdad. La lucha contra el terrorismo. 1960-1980.* Montevideo: Artemisa.

DEMASI, C. (2022b). Juan María Bordaberry ¿una revolución conservadora? En BROQUETAS, M. y CAETANO, G. (coords.), *Historia de los conservadores y las derechas en Uruguay. Guerra Fría, reacción y dictadura. Tomo II.* Montevideo: EBO.

JALABERT, L.; LÓPEZ, J. y MERKLEN, D. (2022). *La dictadura desde Francia.* Montevideo: Ediciones del Viento.

KOSELLECK, R. (1993). *Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos.* Barcelona: Ed. Paidós.

LERIN, F. y TORRES, C. (1987). *Historia política de la dictadura uruguaya. (1973-1980).* Montevideo: Del Nuevo Mundo.

MARCHESI, A. (2001). *El Uruguay inventado. La política audiovisual de la dictadura, reflexiones sobre su imaginario.* Montevideo: Trilce.

MARCHESI, A. y MARKARIAN, V. (2012). Cinco décadas de estudios sobre la crisis, la democracia y el autoritarismo en Uruguay. *Contemporánea.* Vol. 3.

MARCHESI, A. y MARKARIAN, V. (2022). La última dictadura en el pasado y el futuro de las derechas uruguayas. En BROQUETAS, M. y CAETANO, G. (coords.), *Historia de los conservadores y las derechas en Uruguay. Guerra Fría, reacción y dictadura. Tomo II.* Montevideo: EBO.

MARTÍNEZ, V. (2005). *Tiempos de dictadura. 1973/1985. Hechos, voces, documentos. La represión y la resistencia día a día.* Montevideo: EBO.

MORAES, M. I. y JUNCAL, A. (2022). El ruralismo de la segunda posguerra: la Liga Federal de Acción Ruralista. En BROQUETAS, M. y CAETANO, G. (coords.), *Historia de los conservadores y las derechas en Uruguay. Guerra Fría, reacción y dictadura. Tomo II.* Montevideo: EBO.

PALTI, E. (2004a). De la Historia de las «ideas» a la Historia de los «lenguajes políticos». Las escuelas recientes de análisis conceptual. El panorama latinoamericano. En MCEVOY, C. y STUVEN, A. M., *La república peregrina: hombres de armas y letras en América del Sur (1800-1884).* Lima: IFEA-IPEP.

PALTI, E. (2006). El historicismo como idea y como lenguaje. *Prismas,* Vol. 10, n.º 2, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes.

REAL DE AZÚA, C. (1971). *Partidos, política y poder en el Uruguay (1971- Coyuntura y pronóstico).* Montevideo: FHC.

REY, M. (2022). Derecha y autoritarismo: Pacheco y los pachequistas en la dictadura (1973-1985). En BROQUETAS, M. y CAETANO, G. (coords.), *Historia de los conservadores y las derechas uruguayas. Guerra Fría, reacción y dictadura. Tomo II.* Montevideo: EBO.

RIAL, J. (1986). *Las Fuerzas Armadas: ¿Soldados-políticos garantes de la democracia?* Montevideo: CIESU-CLADE-EBO.

TRÓCCOLI, J. (1996). *La ira del Leviatán. Del método de la furia a la búsqueda de la paz. 1963-1996. La visión del Capitán de Navío (R) Jorge Néstor Tróccoli.* Montevideo: Caelum S.A.

WALLERSTEIN, I. (1998). *Impensar las ciencias sociales.* Buenos Aires: SXXI.

ZUBILLAGA, C. (1991). Los partidos políticos ante la crisis (1958-1983). *Cuadernos de CLAEH n.º 3. Colección argumentos.* «De la tradición a la crisis. Pasado y presente de

nuestro sistema de partidos». Montevideo: EBO.

Iván Lautaro Techera Delgado

Profesor de Historia por el Instituto de Profesores Artigas (IPA) en actividad.
Cursando la licenciatura en Historia por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación (FHCE). Universidad de la República (Udelar)
Inglés en Instituto Wings (2009)